



Poder Judicial de la Nación

## CÁMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

En la ciudad de Mar del Plata, a los        días del mes de agosto de dos mil veinticinco, reunidos los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata al análisis de estos autos caratulados: “**MARENGO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL , COMERCIAL, INM c/ MUNICIPALIDAD DE AZUL s/ACCION MERE DECLARATIVA DE DERECHO**”, Expediente FMP 6695/2023, provenientes del Juzgado Federal N° 2, Secretaría N° 1 de la ciudad de Azul. El orden de votación es el siguiente: Dr. Eduardo P. Jiménez, Dr. Alejandro O. Tazza.

### El Dr. Jiménez dijo:

I): Que llegan estos autos a la Alzada, en virtud del recurso de apelación incoado en la fecha 10/4/24 por la parte demandada, contra la de sentencia grado de fecha 27/3/24, por medio de la cual el Sr. Juez *a quo* hace lugar a la presente demanda promovida por “Marengo Sociedad Anónima, Industrial, Comercial Inmobiliaria y Financiera”; declara la inconstitucionalidad del “Derecho de Explotación de Canteras, Extracción de arena, cascajo, pedregullo, sal y demás minerales”, establecido por los artículos 160 y siguientes de la Ordenanza Fiscal Nro. 4795, vigente para el año 2023 y su concordante de la Ordenanza Impositiva, de la Municipalidad de Azul, privándola de su validez; e impone las costas a la Municipalidad de Azul.

II): Los agravios lucen expresados en la memoria de fecha 14/6/24. En primer lugar, considera la accionada que existe error tanto en la demanda como en la sentencia recurrida respecto a los hechos allí desarrollados. Resalta que la obligación tributaria no fue cuestionada y que la empresa es sujeto pasivo del pago del “Derecho de Explotación”. Sostiene que dicha obligación no grava el precio de venta del producto, sino la extracción de recursos naturales que resultan ser públicos. Señala que la base imponible del tributo es la tonelada extraída y su alícuota es el 3% de la tonelada, el cual se



establece conforme las ordenanzas fiscales tomando en consideración el promedio de los valores de venta del producto tomado de los diferentes contribuyentes.

Luego de citar la normativa aplicable, expresa que, si bien la comuna se vale de las declaraciones juradas y la facturación de la empresa para determinar la base imponible, no estaría gravando esa facturación, sino que establecería por un lado la cantidad de toneladas extraídas y por otro el valor de esa tonelada, para establecer la base imponible.

En segundo lugar, se agravia de la competencia establecida para este caso sugiriendo que se remitan las actuaciones a los tribunales de la provincia de Buenos Aires.

En tercer lugar, estima esta parte haber sido afectada en su garantía del acceso a la justicia por el hecho de que el A quo remite parte de sus fundamentos, a lo expresado en el dictado de la medida cautelar.

En cuarto lugar, hace hincapié en la diferencia entre la obligación tributaria y la base imponible y sostiene que la resolución ha confundido dichos elementos. Considera erróneo que se asimile el derecho de explotación con el impuesto al valor agregado por gravar ambos supuestamente el valor de venta del producto.

Sostiene que la base imponible del IVA es la facturación de la empresa y su alícuota es del 21%, en cambio la base imponible del tributo municipal es la cantidad de toneladas de producto extraídas y la alícuota es del 3% del valor de la tonelada mineral extraída. Concluye que ambos tributos resultan distintos, no se afecta la Ley de Coparticipación Federal y tampoco resulta aplicable al caso el fallo “Pan American Energy LLC.”

Finalmente solicita se haga lugar al recurso y se revoque la resolución apelada.

III): Corrido el traslado de ley de la expresión de agravios en fecha [19/6/24](#), la parte actora contesta el [1/7/24](#) (a ellos remito en honor a la brevedad). Encontrándose la causa en condiciones de resolver con el llamamiento de autos para dictar sentencia decretado en fecha [5/7/24](#), es que procedo a abocarme al conocimiento de los aspectos litigiosos traídos a debate.





Poder Judicial de la Nación

## CÁMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

**IV):** Antes de comenzar con el desarrollo de las cuestiones propuestas a revisión de esta Alzada, diré que sólo se atenderán en el presente voto, aquellos planteos que sean considerados esenciales a los fines de la resolución del litigio. En este entendimiento, recuerdo que los jueces no están obligados a considerar todos y cada uno de los reclamos de las partes, pues basta que lo hagan respecto de aquellos considerados esenciales y decisivos para el fallo de la causa.

Nuestra Corte Suprema de Justicia ha sentado la doctrina según la cual los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones, ni a analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (ver “L” 144 p. 611, 27.641-S; LL 145 p. 346; LL 148 p. 692, 29.625-S; CSJN., Fallos 296:445; 297:333 entre otros).

**V):** Para comenzar el análisis de este recurso, considero que corresponde rechazarse el agravio respecto a la competencia establecida para estas actuaciones. Ello por tanto resulta extemporáneo.

Es necesario aclarar la operatividad del principio de preclusión procesal en este caso, en razón de que la demandada tuvo la posibilidad de cuestionar la competencia de la acción interpuesta al momento de contestar la demanda y, sin embargo, no lo hizo (ver contestación de demanda de fecha [13/9/23](#)), por lo que es improcedente darle tratamiento a ese planteo en esta Alzada.

Bien se ha dicho, que el principio de preclusión procesal impide el regreso a estadios y momentos ya extinguidos y consumados del proceso, y que reviste el carácter de orden público, pues tiene por finalidad dar certeza y estabilidad a los actos procesales e impedir el retroceso de aquéllos cuya revisión provocaría inseguridad en las decisiones judiciales.

En virtud de todo lo expuesto, ponderando las razones que hacen al resguardo de principios que se vinculan con la seguridad jurídica y las particulares circunstancias precedentemente señaladas, estas circunstancias en su conjunto sellan la suerte adversa en el recurso intentado por la demandada en lo que respecta a este punto.



**VI):** Ahora bien, ingresando en los agravios propuestos por la demandada en cuanto la sentencia declara la inconstitucionalidad del “Derecho de Explotación de Canteras, Extracción de Arena, cascajo, pedregullo, sal y demás minerales” establecido por los arts. 160 y ss. de la Ordenanza Fiscal Nro. 4795 por considerarlo “sustancialmente análogo” con el I.V.A. y contradecir el art. 9 de la Ley de Coparticipación, corresponde analizar el marco normativo de la cuestión planteada, partiendo por la regulación específica relativa a dicha tasa y su relación con la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos N°23.548.

La **Ordenanza 4662/2022** en su **art. 160** de establecía como hecho imponible “(l)a explotación de canteras y extracción de arena, cascajo, pedregullo, arcilla y demás minerales del suelo o subsuelo, dentro de la jurisdicción del Partido, pagará los derechos establecidos en este Capítulo”. Seguidamente, determinaba que la base imponible consistía en “(l)a percepción de los derechos se fijará sobre el peso (tonelada)de material extraído” (**art. 162**).

En cambio, la **Ordenanza 4795/2022**, dictada para el año 2023, en su **art. 162** modifica la base imponible del Derecho de Explotación de Canteras, estableciendo: “La base imponible del derecho estará dada por las toneladas del material extraído (...) los valores se fijarán sobre la equiparación del material extraído y necesario para la elaboración de una (1) tonelada del producto. El valor que se perciba por la extracción de cada tonelada de material para la elaboración de cemento y cal, tendrá una incidencia equivalente al tres por ciento (3%) del precio de venta en fabrica del cemento o cal hidratada (...) sin considerar el Impuesto al Valor Agregado...”.

**VII)** Ahora bien, estimo importante recordar que por medio de la reforma constitucional de 1994 se estableció la autonomía municipal al expresar en su art. 123 que cada provincia al dictar su constitución debe asegurarla y reglar su alcance en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero (Catalina G. Vizcaino, “Tratado de Derecho Tributario”, Tomo I, Cap. VI pág. 430, Ed. Albeledo Perrot, Bs.As., 2014).





Poder Judicial de la Nación

## CÁMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

Ello como corolario de un tránsito jurisprudencial tendiente a revertir una situación que ciertamente, conspiraba contra la revitalización del federalismo argentino. Pues con la previa Constitución, al no definirse el carácter autónomo de las municipalidades, se facilitaba la centralización administrativa, erosionando en gran medida nuestro federalismo.

Por medio del art. 123 al integrar el capítulo referido a los “gobiernos de provincia” creo que los mentados recaudos encuadran en la concepción de “forma republicana de gobierno”, indicada en el art. 1 CN. Ambas normas son así complementarias y generan en las provincias una obligación de adecuar sus constituciones en el sentido del complemento señalado.

Específicamente, en el caso de la provincia de Bs.As. no desconozco el hecho de que en la reforma de su constitución provincial no cumplió con el actual mandato de la Constitución Nacional y continua sin reconocerle la autonomía a sus municipios. Aun así, ello no puede implicar que los mismos actualmente no puedan clamar en justicia por la efectivización de dicha atribución, pues este derecho procede de forma directa desde nuestra Carta Magna y, además, puedo decir que muchos de ellos la detentaban con anterioridad de dicha reforma. Resulta entonces urgente que la provincia subsane su situación en mora y se agjorne a los nuevos mandatos constitucionales (Libro de mi autoría, “Derecho Constitucional Argentino”, Tomo I, Cap. IX págs. 385-387, Ed. Ediar, Bs.As., 2000).

Reconocida esta facultad, debe destacarse que nuestra Corte Suprema ha manifestado en numerosas oportunidades que no se les confiere a los municipios el poder de reglar las materias que le son propias sin límite alguno. Ello en tanto la Constitución al reconocerle a las municipalidades su autonomía, deja librado a las respectivas provincias la reglamentación de su “alcance y contenido”. Por lo tanto, se admite un marco de autonomía municipal cuyos contornos deben ser delineados por las provincias con el fin de coordinar el ejercicio de los poderes que éstas conservan con el mayor grado posible de atribuciones municipales en los ámbitos de actuación mencionados por el art. 123 CN (“Municipalidad La Plata s/



inconstitucionalidad del decreto-ley 9111”, fecha 28/5/02, Fallos: [325:1249](#)) (Diego A. Giuliano, “Derecho Municipal”, Cap. II págs. 21-22, Ed. Ediar, Bs.As., 2005).

Aun así, aclara que si bien las provincias mantienen un amplio poder para determinar el alcance de sus regímenes comunales, están obligadas a otorgar a sus municipios “(...)las atribuciones mínimas necesarias para el desempeño de su cometido(...)” (Rivademar Angela D. B. Martínez Galvan c/ Municipalidad de Rosario [312:326](#)). Dentro del conjunto de atribuciones mínimas se encuentra algún grado de poder tributario (Eduardo Baistrocchi, “Máximos Precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación – Derecho Constitucional Tributario”, Tomo I pág. 773, Ed. La Ley, Bs.As., 2013).

Ahora bien, habiendo señalado para este caso particular que la Municipalidad de Azul detenta autonomía en el aspecto tributario, nos encontramos con que uno de sus límites es la ley de coparticipación federal de recursos fiscales N°[23.548](#), a la cual adhirió la provincia de Bs.As. con la ley [11.244](#).

En relación a dicha normativa, considero pertinente resaltar lo expresado por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en su fallo **“Municipalidad de Río Colorado s/ Acción de Inconstitucionalidad (ley 2475)”** de fecha 18/3/94. Allí dice que la ley provincial no infringe la autonomía municipal por la sola circunstancia de regular la coparticipación impositiva, desde que dicha temática no puede entenderse incluida en la esfera propia que la Constitución prevé para los municipios. Luego agrega que para que exista violación de la referida autonomía municipal la afectación debería ser de una entidad tal que pusiera en peligro la existencia misma del municipio como entidad constitucional o tornara excesivamente gravosa la conformación del patrimonio municipal (Ob. Cit. Diego A. Giuliano, pág. 25).

En relación a lo antes dicho, bien remarca Spisso que la Constitución no prevé la intervención de los municipios en la formación de la voluntad contractual de la ley de coparticipación tributaria (art. 75 CN), pues resulta impensable lograr un acuerdo si los compromisos que asumen las provincias no obligaran a sus municipios. Carecería de sentido si dicha ley pudiese ser soslayada por los Estados municipales cuando el propósito esencial de este





Poder Judicial de la Nación

## CÁMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

acuerdo es evitar la superposición de tributos sobre una misma fuente (Rodolfo R. Spisso, “Derecho Constitucional Tributario”, Cap. IV pág. 100, Ed. Albeledo Perrot, B.As., 2016).

Ahora bien, el régimen de coparticipación tiene como objetivo evitar la múltiple imposición sobre una misma fuente, pues puede ocasionar graves conflictos y perjuicios económicos. Es por ello que se estableció la participación de las provincias en el producido de los tributos nacionales y la abstención parcial de las mismas en el pleno ejercicio de sus potestades tributarias (Ob. Cit. Rodolfo R. Spisso, Cap. VIII pág. 232).

En su art. 9 expresamente dice: *“La adhesión de cada provincia se efectuará mediante una ley que disponga: a) Que acepta el régimen de esta Ley sin limitaciones ni reservas. b) Que se obliga a no aplicar por sí y a que los organismos administrativos y municipales de su jurisdicción, sean o no autárquicos, no apliquen gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos por esta Ley. En cumplimiento de esta obligación no se gravarán por vía de impuestos, tasas, contribuciones u otros tributos, cualquiera fuere su característica o denominación, las materias imponible sujetas a los impuestos nacionales distribuidos ni las materias primas utilizadas en la elaboración de productos sujetos a los tributos a que se refiere esta ley, esta obligación no alcanza a las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados (...)”* (el resaltado me pertenece).

En efecto, tal como lo explicó el Juez A quo, resulta indispensable para resolver este conflicto definir lo que se entiende por analogía en este marco normativo. Ello lo determina muy bien Dino Jarach, cuya opinión es aceptada por la doctrina mayoritaria en este tema, cuando dice que: *“(...) se entenderá que los impuestos locales son análogos a los nacionales unificados cuando de verifique alguna de las siguientes hipótesis: definiciones sustancialmente coincidentes de los hechos imponible o definiciones más amplias que comprendan los hechos imponible de los impuestos nacionales o más restringidas que estén comprendidas en éstos, aunque se adopten diferentes bases de medición; a pesar de una diferente definición de los hechos imponible, adopción de bases de medición sustancialmente iguales. No será*





relevante para desechar la analogía, la circunstancia de que no coincidan los contribuyentes o responsables de los impuestos, siempre que exista coincidencia sustancial, total o parcial, de hechos imponiblees o bases de medición” (Ob. Cit. Rodolfo R. Spisso, Cap. VIII pág. 233) (el resaltado me pertenece).

Tal concepto fue, a su vez, adoptado por nuestro Máximo Tribunal en el fallo “Pan American Energy” (fallos: [335:996](#), considerando 13º y 14º) donde declara la inconstitucionalidad de una ley provincial que crea un tributo por considerarlo análogo al IVA.

Teniendo esto en cuenta, debemos determinar si corresponde confirmar la sentencia recurrida, en la que se concluye que la tasa creada por el Municipio de Azul es análoga al IVA o si corresponde revocarla.

En el caso del “Derecho de Explotación de Canteras, Extracción de arena, cascajo, pedregullo, sal y demás minerales” podemos ver con claridad que el hecho imponible se perfecciona al momento de explotar de canteras y extraer sus recursos naturales (art. 160 de la Ordenanza 4795/2022), y su base imponible, está dada por las toneladas extraídas, cuyo valor se define por el 3% del precio de venta que tenga en el mercado (art. 162).

En cuanto al IVA, su hecho imponible consiste en la venta de cosas muebles situadas o colocadas en el territorio del país efectuadas por los sujetos indicados en los inc. a, b, d, e y f del art. 4 Dto. 280/97. No esta demás señalar que de lo allí descripto puede concluirse que la actividad que realiza la empresa Marengo es pasiva de este impuesto. En cuanto a su base imponible, es el precio neto de la venta (art. 10).

De la tasa en cuestión podemos hacer dos observaciones. Primeramente, podemos advertir que, si bien el hecho imponible del Derecho de Explotación de Canteras y del IVA no son idénticos, si hay una marcada similitud entre la base imponible de ambos tributos, pues el monto a recaudar depende del valor de venta de los materiales arriba mencionados.

Frente a ello, nos encontramos con que la nueva forma de calcular el valor de esta tasa, generaría un perjuicio tanto a la empresa demandante como a la provincia coparticipante, pues el Municipio estaría recibiendo fondos provenientes de dos tributos distintos pero originados en un mismo hecho







Poder Judicial de la Nación

## CÁMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

generador, al recaudar de forma directa por medio de esta tasa y de forma indirecta al recibir lo que le correspondiere por medio del impuesto coparticipado.

La analogía detectada hace incompatible la tasa en discusión con el art. 9 de la ley de coparticipación, y habiendo adherido la provincia a la ley 23.548, el municipio también debe respetar esta normativa.

Ha expresado nuestra Corte Suprema que, si bien el régimen municipal constituye la base esencial de la organización política argentina, al consagrarlo como requisito de la autonomía provincial, la autoridad municipal no puede desconocer la reglamentación que el gobierno nacional ha dictado en una materia delegada por las provincias a la Nación. Las prerrogativas de los municipios derivan de las correspondientes a las provincias a las que pertenecen, y aquellos quedan sujetos a las obligaciones que éstas asuman (Ob. Cit. Rodolfo R. Spisso, Cap. IV págs. 100-101).

Hay que tener presente que los municipios, al participar en la distribución del producido de los impuestos provinciales y nacionales, están aceptando, aunque mas no sea tácita, pero inequívocamente, el ordenamiento normativo vigente sobre la materia. Por lo tanto, no podrían aceptar la coparticipación y simultáneamente pretender desligarse de las obligaciones emergentes de dichos regímenes (Ob. Cit. Rodolfo R. Spisso, Cap. VIII pág. 246).

Habiéndose determinado la analogía entre la tasa local y el impuesto nacional, cabe destacar que solo podría considerarse que no fue violado el art. 9 de la ley de coparticipación si esta tasa se funda en un servicio efectivamente prestado. Sin embargo, resulta notorio que dentro del hecho imponible no se encuentra descripto servicio alguno que realice la Municipalidad para justificar el cobro del tributo.

Recordemos que, tal como explica García Vizcaino una *“tasa es toda prestación obligatoria, en dinero o especie, que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige, en virtud de ley, por un servicio o actividad estatal que se particulariza o individualiza en el obligado al pago”* (Ob. Cit. Catalina G. Vizcaino, Cap. III pág. 117) (el resaltado me pertenece).



En este aspecto, ha desarrollado la Corte Suprema la regla consistente en que para que una tasa satisfaga el test de constitucionalidad deben cumplirse las siguientes condiciones: a) la contribución debe ser caracterizable como una tasa y no como un mero tributo; b) su redacción debe identificar un servicio particular que debe ser efectivamente prestado por el Estado por lo que sus términos no pueden ser excesivamente amplios y abarcativos; y, c) es el fisco municipal quien debe probar, en todo caso, la concreta, efectiva e individualizada prestación estatal (cons. 7 en “Gasnor SA c/ Municipalidad de La Banda s/ acción meramente declarativa – medida cautelar”, de fecha 7/10/21, Fallos: [344:2728](#)).

Ha remarcado también que a este tipo de tributos *“debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente (Fallos: 236:22 y su cita)”* (“Compañía Química SA c/ Municipalidad de Tucumán”, Fallos: [312:1575](#)).

En “Quilpe SA s/ Inconstitucionalidad” (fecha 9/10/12, Fallos: [335:1987](#)) la Corte Suprema determina que las especies tributarias no solo no existen como conceptos meramente académicos sino que, por el contrario, desempeñan un rol esencial en la coordinación de potestades tributarias entre los diferentes niveles de gobierno, dado que el art. 9 inc. b) de la ley 23.548 excluye a las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados de la prohibición de aplicar gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos. Concluyendo que esta contraprestación concreta es la clave de bóveda del sistema de distribución de competencias tributarias entre las distintas jurisdicciones, ya que dichos servicios permiten a las municipalidades gravar a los contribuyentes sin violar con ello la Constitución Nacional.

Sin embargo, en el caso de análisis no encontramos acreditado estos requisitos mínimos, pues no solo no fue individualizado un servicio como contraprestación por el cobro de la tasa, sino que además, en las actuaciones la Municipalidad no intentó demostrar que se presta un efectivo servicio por el Derecho a Explotación de Canteras.

En lo que aquí respecta, podría decirse que se está violando el principio de finalidad, en tanto dicho principio exige que todo tributo debe





Poder Judicial de la Nación

## CÁMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

atender a la consecución del interés general y no enriquecer sin más las arcas del Estado. El impuesto debe generar un beneficio colectivo, común o público. Particularmente en el caso de las tasas, esta exigencia implica que debe haber una prestación estatal que beneficie al contribuyente como contraprestación de la exacción, es decir, debe ser equivalente al costo del servicio prestado (Ob. Cit. de mi autoría, Cap. X pág. 409).

Esta situación me lleva a concluir en que estamos ante un supuesto de doble imposición que contraría la norma señalada y, a su vez, el orden jerárquico consagrado en el art. 31 y art. 75 inc. 2 de nuestra Constitución Nacional.

Por todo ello, es que corresponde confirmar la inconstitucionalidad del “Derecho a Explotación de Canteras, Extracción de Arena, cascajo, pedregullo, sal y demás minerales” establecido por los art. 160 y ss. de la Ordenanza 4795/2022, vigente para el año 2023 de la Municipalidad de Azul

**VIII):** Finalmente, y respecto de la imposición de costas en Alzada, entiendo que no existen aquí razones que inviten a apartarme aquí de la regla general de carga al vencido ya que como bien lo señaló la jurisprudencia, en forma conteste “(...) *las costas no constituyen un castigo para el perdedor, sino que importan tan solo un resarcimiento de los gastos que ha debido efectuar la parte a fin de lograr el reconocimiento de su pretensión*” (Cfr., entre muchos otros, CNCiv. Sala “D” 1/8/1983, “V. L. R. c/ G; C. A.”; íd CNCom. Sala “C”, 30/07/1990, “Safico SA. c/ Saenz Valiente, Bullrich y Cia. Y otros”).

**IX):** Por lo señalado es que propongo al acuerdo: **1) RECHAZAR** el recurso de apelación y **CONFIRMAR** la sentencia en todo y cuanto hubiese sido objeto de apelación y agravios; **2) IMPONER LAS COSTAS** al vencido (Art. 68 CPCCN).

Tal, el sentido de mi voto.

**El Dr. Tazza dijo:**

Adhiero a la solución del caso que propone el Dr. Jiménez, por compartir los fundamentos expresados en su voto.



/// del Plata, de agosto de 2025.

**VISTOS:**

Estos autos caratulados: **“MARENGO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL , COMERCIAL, INM c/ MUNICIPALIDAD DE AZUL s/ ACCION MERE DECLARATIVA DE DERECHO”**, Expediente FMP 6695/2023, provenientes del Juzgado Federal N° 2, Secretaría N° 1 de la ciudad de Azul y lo que surge del Acuerdo que antecede;

**SE RESUELVE:**

**1) RECHAZAR** el recurso de apelación y **CONFIRMAR** la sentencia en todo y cuanto hubiese sido objeto de apelación y agravios.

**2) IMPONER LAS COSTAS** al vencido (Art. 68 CPCCN).

**REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.**

**DR. ALEJANDRO O. TAZZA**  
**JUEZ DE CÁMARA**

**DR. EDUARDO P. JIMÉNEZ**  
**JUEZ DE CÁMARA**

Se deja constancia que se encuentra vacante el cargo de tercer integrante de este Tribunal (art. 109 RJN); que los jueces han firmado electrónicamente esta sentencia desde sus respectivos despachos; y que en el día de la firma de la misma en el Sistema Lex 100 fue notificada electrónicamente a las partes con domicilio constituido.

**DR. WALTER D. PELLE**  
**SECRETARIO**

---

*Fecha de firma: 29/08/2025*

*Firmado por: ALEJANDRO OSVALDO TAZZA, JUEZ DE CÁMARA*

*Firmado por: EDUARDO PABLO JIMENEZ, JUEZ DE CÁMARA*

*Firmado por: WALTER DAVID PELLE, SECRETARIO DE CAMARA*



#37713756#468746384#20250827123534839



Poder Judicial de la Nación

## CÁMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

---

*Fecha de firma: 29/08/2025*

*Firmado por: ALEJANDRO OSVALDO TAZZA, JUEZ DE CÁMARA*

*Firmado por: EDUARDO PABLO JIMENEZ, JUEZ DE CÁMARA*

*Firmado por: WALTER DAVID PELLE, SECRETARIO DE CAMARA*



#37713756#468746384#20250827123534839